

ASAMBLEA GENERAL



SEGUNDA COMISION, 231a.

SESION

Sábado 6 de diciembre de 1952,
a las 10.30 horas

SEPTIMO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Sede Permanente, Nueva York

SUMARIO

Página

Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados (A/2172, Capítulo III, A/2192, A/C.2/L.155, A/C.2/L.165 y Corr.1 y Corr.3 y A/C.2/L.166) (continuación) 275

Presidente: Sr. Jiři NOSEK (Checoslovaquia).

Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados (A/2172, Capítulo III, A/2192, A/C.2/L.155, A/C.2/L.165 y Corr.1 y Corr.3 y A/C.2/L.166) (continuación)

[Tema 25]*

1. El Sr. CUSANO (Uruguay) declara que si algún problema tiene relación directa con el financiamiento económico de los países insuficientemente desarrollados es, sin duda, el de la libre explotación de las riquezas por esos países. Desde luego, el financiamiento desde el exterior en forma de ayuda, préstamos o inversiones privadas, es un elemento precioso, incluso indispensable, para el desarrollo de dichos países, pero no constituye, sin embargo, la solución ideal. A juicio del Sr. Cusano, para un país insuficientemente desarrollado lo ideal consiste en alcanzar la independencia económica, disponer libremente de sus recursos y procurarse divisas mediante la venta de sus productos a compradores por él elegidos. Tomando en cuenta esas consideraciones, la delegación del Uruguay presentó el proyecto de resolución que lleva la signatura A/C.2/L.165.

2. El Sr. Cusano subraya que el Uruguay cumplió siempre sus compromisos con el capital extranjero y que no se propone en manera alguna modificar esa actitud. Desea formular aclaraciones al respecto, que se imponen a consecuencia de los comentarios del *New York Times* sobre el proyecto presentado por el Uruguay. Después de preguntarse si conviene interpretar dicho proyecto como el anuncio de próximas medidas de nacionalización en el Uruguay, ese diario sostiene que el proyecto de resolución no representa la actitud del Gobierno del Uruguay, sino solamente la opinión de un miembro de la delegación, jefe de la oposición en ese país.

3. La afirmación, sostiene el orador, es tendenciosa además de errónea: el Gobierno del Uruguay da a su delegación instrucciones muy precisas, que los repre-

sentantes se comprometen a cumplir. Por lo tanto, no hay ninguna divergencia entre las ideas que exponen en la Asamblea General y las opiniones de su Gobierno.

4. El representante del Uruguay contesta también al juicio algo irónico del *New York Times* sobre dicho proyecto de resolución. Coincide de buen grado con ese diario en que el proyecto de resolución "no originará el fin del mundo". Al presentar el proyecto, la delegación del Uruguay no quiso de ninguna manera provocar un trastorno universal, sino sencillamente establecer normas que permitan asegurar el bienestar de los pueblos dentro de una existencia pacífica.

5. Después de esta aclaración, el representante del Uruguay se refiere a las preguntas formuladas por los representantes de varias delegaciones.

6. Varios representantes han creído que debían señalar el prestigio que el Uruguay se ha conquistado por su política de respeto escrupuloso a las obligaciones contraídas. En efecto, la legislación del Uruguay jamás ha lesionado los intereses extranjeros en ese país. Nunca ha inquietado al capital extranjero ni dejado de pagar su deuda exterior. Por estas razones, la delegación del Uruguay tiene la autoridad moral necesaria para presentar su proyecto. Es verdad que el Gobierno del Uruguay ha nacionalizado los servicios públicos y ciertas industrias básicas y, en particular, la industria de la energía eléctrica, los transportes, los servicios telefónicos y telefónicos, el suministro de agua corriente, las instalaciones de los puertos, los seguros, las industrias de combustibles, alcoholes, cemento, pesca, etc. Antes de la nacionalización, la mayoría de estos servicios pertenecían a sociedades privadas, financiadas, en general, por capitales procedentes del Reino Unido que, de esta manera, participaron preponderantemente en el desarrollo de la economía naciente del Uruguay. El Sr. Cusano se complace en destacar que el Gobierno de la Gran Bretaña nunca tuvo que intervenir en las relaciones entre el Gobierno del Uruguay y los residentes británicos que habían invertido capitales en el Uruguay. Cuando el Uruguay nacionalizó sus servicios

* Número de este tema en el programa de la Asamblea General.

públicos, indemnizó justa y aun ampliamente a las sociedades interesadas, conforme a las disposiciones del artículo 32 de la Constitución entonces vigente, referente a la expropiación. Los mismos principios se enuncian en la nueva Constitución aprobada en 1952 mediante un plebiscito, y el Sr. Cusano añade que está en condiciones de afirmar que su país continuará siendo fiel a su política de justicia y de integridad.

7. Agrega que otros representantes le hicieron observar que como el principio de la nacionalización está universalmente reconocido por el derecho internacional y por muchas constituciones, las recomendaciones de las Naciones Unidas tendrían el carácter de una declaración platónica. El Sr. Cusano replica que ese es el carácter de la gran mayoría de las decisiones de las Naciones Unidas y que tal vez eso es lo que les da su valor: los grandes principios universales derivan su poder moral de la sinceridad de quienes los reconocen. Sin embargo, el Sr. Cusano no cree que el proyecto de su delegación sea puramente platónico. En efecto, se propone afirmar la necesidad de proteger a los pueblos de los países insuficientemente desarrollados y justificar la actitud de los gobiernos de dichos países que anhelan la nacionalización de sus recursos naturales. Corresponde a las Naciones Unidas proclamar esos principios y demostrar idéntica unidad de espíritu que en el generoso Preámbulo de la Carta que, aunque también es platónico, no deja de constituir por ello una maravillosa manifestación de confianza en las fuerzas morales protectoras de la humanidad que sufre.

8. El Sr. Cusano analiza luego el fondo de la cuestión planteada por el proyecto de su delegación. El principio de la nacionalización es indudablemente un viejo principio del socialismo de Estado; sin embargo, la oportunidad, más que la antigüedad, es la que da a los principios todo su valor. Por eso en el Uruguay, las medidas de nacionalización, antes censuradas, se impusieron en el momento oportuno, es decir, cuando el Estado se encontró en situación técnica y económica suficientemente fuerte para reemplazar a los intereses privados. Examinando el problema desde el punto de vista del conjunto de los países insuficientemente desarrollados el Sr. Cusano señala que algunos de esos países han considerado ya, con más o menos audacia, la posibilidad de nacionalizar sus recursos naturales. Señala que conviene no confundir ese derecho soberano de los Estados a aprovechar lo que les pertenece, con las manifestaciones de una ideología agresiva y destructora. En apoyo de su opinión, recuerda una reciente declaración del Sr. Hernán Santa Cruz, exrepresentante de Chile en las Naciones Unidas. En su discurso, el Sr. Santa Cruz se refirió a la miseria en que viven los pueblos de los países insuficientemente desarrollados, y a la catastrófica situación de la balanza comercial de dichos países. Mencionó, como contraste, las riquezas naturales inmensas que poseen esos países y subrayó, también, que los países industrializados se convierten, cada vez más, en tributarios de los países insuficientemente desarrollados en lo que atañe a las materias primas que sus industrias necesitan. Estos son argumentos favorables a una revisión de los principios que rigen el aprovechamiento de los recursos naturales en los países insuficientemente desarrollados.

9. Por su parte, el Sr. Cusano cree que en un mundo que ha conocido dos guerras devastadoras y crisis

económicas y sociales gigantescas, ya no es posible sostener conceptos anticuados sobre el aprovechamiento de la riqueza de los pueblos. Es un trágico error creer en la supervivencia de doctrinas egoístas que tienden a privar a la población de un país del disfrute de las riquezas que le pertenecen. El Sr. Cusano juzga que indudablemente conviene respetar al capital privado, base de la sociedad moderna, pero que importa también proteger los intereses de la colectividad. Como lo expresa la Constitución del Uruguay, la propiedad es un derecho inviolable, excepción hecha de la aplicación de las leyes de interés general.

10. El Sr. Cusano opina que para favorecer el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, es indispensable hallar soluciones convenientes y permanentes. Por encomiable que sea, la ayuda técnica no constituye más que una solución provisional y si se quiere fomentar la liberación económica y política de los pueblos, es menester considerar medidas que les permitan aprovechar por sí mismos y en su propio beneficio los recursos naturales que poseen. Agrega que la delegación del Uruguay presentó su proyecto de resolución con ese espíritu.

11. El Sr. SILES ZUAZO (Bolivia) señala que el problema planteado por la delegación del Uruguay es de capital importancia para los países insuficientemente desarrollados y, principalmente, para Bolivia, cuya delegación intervendrá en el debate no desde el punto de vista teórico, sino con el testimonio de una experiencia dramática: en efecto, al nacionalizar sus grandes minas de estaño, Bolivia acaba de adoptar una decisión que influirá en el curso de su historia.

12. Por el interés que atribuye al problema, la delegación de Bolivia se reserva el derecho de intervenir a fondo en una de las próximas sesiones; y por el momento, se limita a declarar que aprueba el principio del proyecto de resolución del Uruguay (A/C.2/L.165 y Corr.1 y 3) y que está dispuesta a atender todas las sugerencias constructivas que se formulen acerca de su propio proyecto de enmienda (A/C.2/L.166); asimismo, llegado el caso, presentará otras proposiciones a la Comisión.

13. El Sr. BETETA (México) destaca que a menudo resulta difícil distinguir entre los asuntos relativos al derecho internacional y los que se refieren sólo a la soberanía de los Estados; esto no obstante, las disposiciones que rigen la propiedad y el aprovechamiento de los recursos naturales sin duda alguna corresponden al Estado y figuran en muchas constituciones nacionales. Por ejemplo, al artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos de México, proclama el derecho de la nación a subordinar la propiedad privada al interés público y adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación y la distribución equitativa de las riquezas naturales. Por estas razones, México no puede aceptar proposición alguna tendiente a obtener el reconocimiento internacional del derecho de los Estados a nacionalizar sus recursos naturales, pues cualquier proposición de esa naturaleza parecería poner en duda la validez de un derecho cuyo ejercicio constituye una de las manifestaciones más evidentes de la soberanía nacional.

14. Aun aprobando las ideas expuestas en el proyecto de resolución que la delegación del Uruguay acaba de presentar a la Comisión, la delegación de México no

puede aceptar el último párrafo en que se recomienda a los Estados Miembros el reconocimiento del derecho de cada país a nacionalizar y explotar libremente sus riquezas naturales. Las Naciones Unidas no tienen que pronunciarse respecto a un principio cuya validez, insiste el Sr. Beteta, es imposible poner en duda. Los países autorizados por su Constitución pueden ejercer el derecho de nacionalizar, de igual manera que ejercen el derecho de establecer impuestos, o el de exigir el servicio militar de sus ciudadanos, sin que organismo internacional alguno tenga que reconocerles ese derecho.

15. La delegación de México considera con simpatía la enmienda propuesta por la delegación de Bolivia que tiende evidentemente a corregir la principal debilidad del proyecto de resolución del Uruguay, pero que no lo logra del todo. La delegación de México piensa que así como no conviene invitar a los Estados Miembros a “respetar” el derecho de cada país a nacionalizar y explotar sus riquezas naturales, tampoco conviene exhortarlos a “reconocerlo”. Por su parte, prefiere una redacción que exprese más claramente la idea de la enmienda presentada por Bolivia: los Estados Miembros deben abstenerse de ejercer la menor coacción en los países que adopten medidas de nacionalización, precisamente porque están obligados a respetar el derecho de cada país a nacionalizar sus riquezas naturales.

16. Además, la expresión “agencias gubernamentales y administrativas”, que se lee en la enmienda de Bolivia, plantea varios problemas: ¿Se considera también a los servicios diplomáticos? ¿No tendrían derecho a intervenir en defensa de los intereses económicos de los residentes de su nacionalidad? El empleo de vocablos tan ambiguos plantea una serie de problemas muy complejos, de carácter jurídico y político, que están fuera de la jurisdicción de la Segunda Comisión.

17. Por todas estas razones, y de una manera completamente oficiosa, el Sr. Beteta propone al representante de Bolivia que modifique su enmienda para recomendar a los Estados Miembros, si es que desean alcanzar los objetivos y principios de la Carta, que se abstengan de recurrir a medidas de coerción, políticas o económicas, o a cualesquiera represalias respecto a los países que hayan ejercido o se propongan ejercer su legítimo derecho a nacionalizar y explotar libremente sus riquezas naturales.

18. El Sr. STAHL (Suecia) recuerda que en el debate general (196a. sesión), la delegación de Suecia tuvo ya ocasión de subrayar que si una relativa igualdad económica entre las clases de la población contribuye al mantenimiento de la paz social nacional, de igual manera, la igualdad de condiciones económicas y sociales de diferentes naciones constituye un elemento esencial de la paz y de la seguridad internacionales. Es una opinión que se impone gradualmente en el mundo. En Suecia, por ejemplo, se realizan grandes esfuerzos por difundir información referente a los países insuficientemente desarrollados y a los problemas que éstos tienen que resolver.

19. El desarrollo económico de esos países exige toda clase de medidas, pero tal vez el medio más seguro de acelerarlo consiste en aumentar el volumen de inversiones privadas, únicas capaces de asegurar la explotación de los recursos disponibles en el plazo más breve posible. Sin embargo, para atraer a los capitales extran-

jeros, es indispensable que las condiciones políticas y económicas del país inspiren confianza a los capitalistas. No hay organización internacional alguna que pueda crear ese ambiente de confianza y los países interesados son los que deben crearlo conforme a los métodos que juzguen pertinentes.

20. Con respecto a la nacionalización, la delegación de Suecia opina que el asunto, tan complejo, no corresponde a la jurisdicción de las Naciones Unidas. Evidentemente, corresponde a la categoría de asuntos comprendidos en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, o sea, los “asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.

21. La aprobación de un proyecto de resolución que otorgue la aprobación de las Naciones Unidas a unas medidas que grupos importantes de la población de diferentes países consideran como manifestaciones de una política a la que se oponen, presenta el riesgo de tener una lamentable consecuencia: disminuir la confianza que aquellos grupos tienen en las Naciones Unidas, organización internacional que se encuentra por encima de las controversias políticas internas. Semejante decisión no se ajustaría a la Carta y, en última instancia, no serviría a los intereses de los Estados Miembros.

22. También hay razones prácticas que se oponen a la aprobación del proyecto de resolución presentado por el Uruguay. El Sr. Stahl se limita a mencionar lo siguiente: al proclamar el derecho a nacionalizar sin señalar, al mismo tiempo, la obligación de conceder una indemnización conveniente a los intereses extranjeros perjudicados por la nacionalización, se corre el riesgo de quebrantar la confianza de los capitalistas y entorpecer así el financiamiento del desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados. Por lo tanto, el proyecto del Uruguay es incompatible por sus efectos aunque no por su forma, con el espíritu del Artículo 55 de la Carta.

23. Por las razones de principio y las consideraciones prácticas que acaba de exponer, el Sr. Stahl manifiesta que no podrá votar a favor del proyecto de resolución sometido a la Comisión por la delegación del Uruguay.

24. El Sr. CHAUVET (Haití) declara que adoptar un proyecto de resolución como el que está sometido a la Comisión sería debilitar el derecho que tienen todos los Estados soberanos a nacionalizar y explotar sus riquezas naturales. La nacionalización, considerada desde el punto de vista de la independencia económica, es una medida esencialmente interna. El Sr. Chauvet teme, pues, que el reconocimiento solemne de este derecho destruya el efecto de las medidas que la Comisión trata de adoptar para alentar la inversión de capitales extranjeros en las empresas de los países insuficientemente desarrollados. Por estas razones, y a pesar de toda su buena voluntad, la delegación de Haití se abstendrá en la votación sobre el proyecto de resolución del Uruguay.

25. Sir Clifford NORTON (Reino Unido) señala que el proyecto de resolución presentado por la delegación del Uruguay ha suscitado ya un estimulante cambio de pareceres en la Comisión, lo que es natural, por tratarse de un tema que se presta a controversia.

26. La razón principal por la cual la Segunda Comisión debería abstenerse de adoptar una resolución de

esta naturaleza, es que, a pesar de toda la prudencia con que está redactada, la palabra "nacionalización" presenta el riesgo de que puede tener un efecto contrario sobre las personas que podrían invertir capital y es de temer que este proyecto preocupe a la vez a los capitalistas extranjeros y a los poseedores de ahorros locales. En general, la mayoría de la gente no analiza muy detenidamente una propuesta de este carácter y por consiguiente, se alarmará, sean cuales fueren las intenciones de los autores. Sir Norton cree que nunca se podrá insistir demasiado en las consecuencias que la aprobación de este proyecto podría tener para el resultado de los esfuerzos que realiza la Comisión con objeto de acelerar el desarrollo de los países insuficientemente desarrollados.

27. El proyecto de resolución que se examina no está, además, redactado en términos muy claros. Si la delegación del Uruguay piensa en el derecho de los Gobiernos de los Estados Miembros a controlar los recursos naturales de sus países, conviene señalar a este respecto que la nacionalización no es más que una de las formas que puede adoptar dicho control. En todos los países, los órganos legislativos adoptan leyes que rigen la propiedad y la explotación de los bienes. En varios países, las leyes relativas a los títulos de propiedad difieren según se apliquen a los ciudadanos del país o a los extranjeros. Estas leyes varían igualmente de un país a otro. En general, se reconoce que entre las prerrogativas del Estado figura el derecho de legislar sobre la propiedad. No obstante, al hablar de nacionalización, se introduce un concepto nuevo. La nacionalización no es sino la utilización de un método por el que algunos Estados fiscalizan los recursos que se explotan o que se pueden explotar en sus territorios, y plantea problemas de política interna cuya solución debería dejarse a los gobiernos mismos, que tomarán las decisiones que se impongan tomando en cuenta sus compromisos internacionales de otra índole, así como las disposiciones constitucionales pertinentes.

28. Es indudable que no se debe esperar que las decisiones de la Segunda Comisión tengan carácter jurídico, pero ella debe procurar que no se adopten recomendaciones que, por carecer de precisión, puedan tener consecuencias insospechadas. Al parecer, el autor del proyecto de resolución ha querido enunciar el principio general de que se ha de proteger el derecho de los países, particularmente los insuficientemente desarrollados, a fiscalizar la explotación de sus recursos naturales. Al mismo tiempo, eso requiere una interpretación. El orador deduce de las observaciones preliminares del representante del Uruguay que está implícito en el texto que los países que adoptan medidas de nacionalización lo deben hacer ateniéndose estrictamente a sus obligaciones legales.

29. La delegación del Reino Unido no piensa, por el momento, presentar enmiendas. Desea solamente exponer su parecer sobre la cuestión muy grave que se ha planteado y se reserva el derecho de intervenir nuevamente en una etapa ulterior del debate.

30. El Sr. ABDOH (Irán) manifiesta que su delegación ha estudiado detenidamente el proyecto de resolución del Uruguay y la enmienda de Bolivia y que está dispuesta a apoyar ambos proyectos, no sin hacer antes algunas observaciones.

31. Para un Estado, el derecho de disponer libremente de sus recursos naturales emana del principio mismo de la soberanía, reconocido por el derecho internacional. Se trata de un derecho inalienable y su desconocimiento o limitación entrañaría la supresión de la soberanía sin la cual un Estado no puede ser Miembro de las Naciones Unidas. En virtud del principio de soberanía, cada Estado tiene el derecho ilimitado de disponer a su criterio de los recursos naturales. Se han tomado medidas de nacionalización en numerosos países y principalmente en Francia, Bulgaria, Polonia, Yugoslavia, Checoeslovaquia y el Reino Unido. Aun en Estados Unidos, los poderes públicos han intervenido en la creación de grandes empresas tales como la Tennessee Valley Authority. Finalmente, México, en 1938, e Irán, en 1951, han nacionalizado su industria del petróleo.

32. Con motivo de la nacionalización del petróleo en México, el Gobierno de Estados Unidos reconoció, por conducto del Sr. Cordell Hull, Secretario de Estado, el principio de la nacionalización. El Gobierno del Reino Unido ha admitido igualmente este principio cuando, en una intervención en la Cámara de los Comunes, el Ministro de Relaciones Exteriores declaró que, según las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, las materias primas de un país le pertenecen en propiedad. En una nota de fecha 3 de agosto de 1951, el Gobierno del Reino Unido declaró que reconocía, tanto en su nombre como en nombre de la Anglo-Iranian Petroleum Company el principio de la nacionalización de la industria petrolera de Irán. Confirmó esa declaración en una nota fechada el 27 de agosto de 1952.

33. En estas condiciones, podría preguntarse qué utilidad tiene una resolución que recomiende a los Gobiernos que reconozcan el derecho que tiene todo Estado de nacionalizar sus riquezas naturales. No obstante, salvo algunas enmiendas, esta resolución sería útil si recomendara a los Estados que no recurrieran a medidas coercitivas, políticas o económicas, en caso de que un gobierno ejerciera su derecho a nacionalizar sus recursos naturales.

34. Por consiguiente, el representante de Irán estima que la Comisión podría pronunciarse sobre los tres aspectos siguientes del problema que le ha sido sometido. En primera lugar, el derecho de los países insuficientemente desarrollados a disponer libremente de sus recursos naturales constituye un factor muy importante de su desarrollo económico. En segundo lugar, el ejercicio de este derecho garantiza la independencia económica de estos países. Finalmente, cuando un Estado ejerce su derecho a nacionalizar sus recursos naturales, los demás Estados Miembros de la Organización deben abstenerse de toda medida coercitiva.

35. De los debates de la Comisión se deduce que la estabilidad de la economía internacional sólo podrá lograrse mediante el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados. En la actualidad, los recursos de que se dispone para financiar este desarrollo económico son aun insuficientes. En estas condiciones, es menester proporcionar a los países insuficientemente desarrollados la posibilidad de aprovechar sus recursos naturales y destinar los ingresos procedentes de la venta de sus materias primas a la realización de sus programas de desarrollo económico. Es necesario que ciertos países industrializados comprendan que, en el

mundo moderno, no se justifica la política de explotar las riquezas de otro país en detrimento de los intereses de la población de dicho país.

36. Para un Estado, el derecho de nacionalizar sus recursos naturales constituye la garantía de la independencia económica. Para comprender este aspecto de la cuestión, hay que conocer las razones por las cuales algunos países han adoptado medidas de nacionalización. El representante de Irán expone la situación existente en su país antes de la nacionalización de la industria petrolera. La Anglo-Iranian Petroleum Company retenía en su poder la mayor parte de los ingresos procedentes de la venta del petróleo y sólo entregaba a Irán modestas regalías. El Gobierno de Irán no tenía siquiera la posibilidad de disponer de esas sumas, transferidas a Londres a una cuenta especial, en libras esterlinas. Como dichas sumas no eran muy a menudo convertibles en dólares o en otras divisas, Irán se encontraba en la obligación de adquirir en el Reino Unido los bienes de capital que necesitaba. El Gobierno del Reino Unido estaba en condiciones de impedir toda iniciativa que juzgara contraria a sus intereses. La Anglo-Iranian trataba de obtener el máximo de utilidades sin tener en cuenta las necesidades económicas de Irán y se oponía a toda reforma social y el régimen concesionario constituía un obstáculo para el desarrollo económico del país. En apoyo de su tesis, el representante de Irán da lectura al tercer párrafo del preámbulo del capítulo 3 del informe titulado "*Les conditions économiques au Moyen-Orient*" (E/1910/Add.2/Rev.1) (Situación Económica del Oriente Medio).

37. Razones políticas han inducido igualmente a países como Irán a nacionalizar sus industrias. En efecto, la Anglo-Iranian intervenía en los asuntos internos de Irán y, en la declaración que formuló en 1951 ante el Consejo de Seguridad,¹ el Primer Ministro de Irán señaló que, a pesar de su apariencia comercial, la Anglo-Iranian debía ser considerada como el equivalente moderno de la East-Indian Company que, en poco tiempo, había dominado a toda la península de la India. El representante de Irán recuerda a continuación las medidas de nacionalización del petróleo adoptadas en 1938 por el Gobierno de México. La estabilidad económica del país estaba gravemente amenazada por las intervenciones de las compañías petroleras Standard Oil y Royal Dutch.

38. Así, mientras que en Europa las medidas de nacionalización se han inspirado principalmente en consideraciones económicas y sociales, las decisiones de esta naturaleza adoptadas en los países insuficientemente desarrollados han sido motivadas, en gran parte, por consideraciones políticas. Irán ha procedido a la nacionalización de su industria petrolera porque la existencia misma del país estaba amenazada por el régimen vigente. De ello no debe deducirse que el Gobierno de Irán no desea recibir capital extranjero, por el contrario, está dispuesto a acoger a los capitalistas extranjeros que desean realizar inversiones en Irán, pero sólo a base de contratos comerciales y con la condición de que el capital extranjero no trate de obtener privilegios contrarios a los intereses de Irán.

39. El Sr. Abdoh observa que los trusts del petróleo tienen un poder tal que recurren a sus gobiernos no

sólo para imponer su voluntad a los países en los cuales ejercen o han ejercido sus derechos concesionarios sino también para oponerse, en ciertos casos, a las decisiones adoptadas por organismos competentes de otras grandes Potencias. Según el *New York Times*, la Anglo-Iranian Company pidió recientemente al Gobierno británico que interviniera para no permitir que sus documentos fueran a parar a manos de la Comisión Investigadora que estudia las actividades de los *cártels* del petróleo. Estas compañías petroleras piden igualmente la intervención de sus gobiernos cuando un Estado adopta medidas de nacionalización, a fin de perpetuar su dominación económica bajo una nueva forma. En realidad, la no intervención de las Potencias extranjeras en favor de sus súbditos, salvo en los casos de denegación de justicia, constituye un principio que no puede negarse. Sin embargo, algunas de las grandes Potencias no siempre lo han respetado.

40. Con motivo de la nacionalización de la industria petrolera de México, el Gobierno del Reino Unido ejerció presión económica sobre el Gobierno de México. Pretendió que las compañías petroleras eran dueñas de todos los yacimientos petrolíferos mexicanos y que, para que la expropiación fuera legal, debía abonarse el equivalente del valor total de esas reservas subterráneas. De esa manera el Gobierno británico quiso demorar la concertación de un acuerdo y crear a México una situación económica intolerable. Para impedir la venta del petróleo mexicano en el mercado mundial, las compañías petroleras extranjeras sostuvieron que ese petróleo era una mercadería robada y que quien la comprara se haría, en consecuencia, cómplice del ladrón. Las compañías petroleras presentaron demandas ante los tribunales europeos a fin de proceder a la incautación del petróleo mexicano que llegara a Europa. No obstante, las incautaciones provisionales dispuestas por los tribunales de los Países Bajos fueron levantadas una tras otra. De igual modo, un tribunal francés y otro belga rechazaron las reclamaciones presentadas por las compañías petroleras. Cabe observar que el Gobierno del Reino Unido ha recurrido, contra Irán, a procedimientos análogos a fin de impedir la venta del petróleo iraní en el mercado mundial.

41. El Gobierno de Irán se ha declarado siempre dispuesto a admitir el principio de la indemnización y hasta aceptó someter el problema al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, esta propuesta no fué acogida favorablemente pues se quería que Irán abonara, a título de indemnización, no sólo el valor de los bienes de la Anglo-Iranian, sino también las utilidades que esta compañía hubiera podido obtener si la concesión otorgada en 1933 hubiera continuado hasta 1993. El representante de Irán señala que estas medidas se proponían agravar la situación económica de su país y mantener, bajo una nueva forma, la dominación política y económica de Irán por la Anglo-Iranian.

42. Este ejemplo ilustra claramente las razones que han inducido sin duda a las delegaciones del Uruguay y de Bolivia a presentar el proyecto de resolución y la enmienda sometida a la Comisión. El representante de Irán no piensa que el proyecto y la enmienda que le acompaña puedan surtir efectos milagrosos aunque sin embargo, señalan a la atención de los Estados Miembros las responsabilidades que les incumbirían si adop-

¹ Véanse las *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Sexto Año, 560a. sesión.*

tasen y mantuviesen medidas coercitivas y de ingerencia política y económica, contrarias a todas las reglas del derecho y a los principios de la cooperación internacional.

43. El Sr. HUNEIDI (Siria) considera que el derecho que tienen los Estados a nacionalizar y explotar libremente sus riquezas naturales presenta, para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, una importancia considerable, tanto más cuanto que el ejercicio de este derecho por los países insuficientemente desarrollados origina frecuentemente litigios que tienen repercusiones internacionales.

44. En los últimos años, el Gobierno de Siria ha nacionalizado varias compañías extranjeras abonándoles una indemnización adecuada. Por consiguiente, la delegación de Siria estima que el derecho de un país a nacionalizar sus recursos naturales es un derecho reco-

nocido en derecho internacional y que es inalienable. Todos los oradores han expresado la misma opinión, pero algunos de ellos tienen algunas dudas acerca de la necesidad de adoptar un proyecto de resolución que reconozca ese derecho. Otros han hablado de las repercusiones que podría tener una recomendación de esta naturaleza en los países que se proponen invertir capitales en regiones insuficientemente desarrolladas.

45. La delegación de Siria no comparte enteramente estos temores, sino que cree que es necesario redactar el proyecto de resolución en términos mesurados, pues de lo contrario se correría el riesgo de que tuviera efectos perjudiciales sobre las inversiones en los países insuficientemente desarrollados. Apoyará el proyecto de resolución así como toda enmienda encaminada a mejorar su redacción.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.